

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Los militares y la guerra contra las drogas [The military and the war on drugs]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Malamud Got, Jaime
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-13 08:49:35
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220217

Los militares y la guerra contra las drogas

Malamud-Goti, Jaime

Jaime Malamud Goti: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Asesor presidencial (Argentina 1983-1987); ex-procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y University of Arkansas at Little Rock.

A pesar de que se gastan millones de dólares en la erradicación de la coca, la guerra contra las drogas ha provocado ya sus propias bajas. Cabe entonces preguntarse qué debe hacerse cuando se advierte que la urgencia en derrotar el tráfico de drogas entra en conflicto con la urgencia por proteger los derechos humanos.

En 1988, el congreso boliviano promulgó una nueva ley antinarcóticos oficialmente destinada a eliminar el flujo de cocaína desde el Cono Sur. Los hechos demostraron, sin embargo, que el propósito de esta ley era satisfacer las exigencias de la diplomacia estadounidense. Según lo indica el informe anual enviado al Congreso de los EE.UU. en 1989, los políticos bolivianos parecen haber alcanzado este objetivo¹.

¹«Desde un régimen militar influenciado por el tráfico de drogas a un sistema democrático que ha desarrollado un programa de erradicación de coca. Basamos nuestra decisión a favor de la certificación en que, el año 1988 ha sido el año más exitoso hasta hoy (...) [Este programa] ha excedido la meta de erradicar 1.800 hectáreas convenidas en el acuerdo bilateral firmado en 1987. [Bolivia] ha comenzado, además, con un programa de erradicación forzosa (...) Sin embargo las áreas de cultivo de coca han continuado su expansión y los altos precios de la hoja de coca perjudican el programa de erradicación voluntaria (...) En suma, creemos que, en 1988, Bolivia ha realizado un encomiable esfuerzo aunque el continuo avance de la producción [de coca] es particularmente preocupante y es necesario hacer aún más para desalentar la expansión del cultivo de coca (International Narcotics Control: The President's 1/3/1989 Certification for Foreign Assistance Eligibility and Options for Congressional Action). Es probable que resulte más fácil entender la participación de Bolivia en el cultivo de coca en términos de dólares versus hectáreas: «Bolivia y Perú producen prácticamente toda la hoja de coca del mundo. El gobierno de La Paz estima que el negocio de drogas hace ingresar a Bolivia 1.600 millones de dólares por año de los cuales 600 millones ingresan al patrimonio de 400.000 personas involucradas en el cultivo de coca» (Zeballos: «Bolivia President to Ask Bush for Help in Drug Fight», Reuters Library Report Reuters Wire Service, 6/5/90).

Tema de derechos humanos

En 1988 visité la región de Chapare, en Bolivia, como enviado del presidente Raúl Alfonsín. En un punto muy alto e inhóspito del camino montañoso que conduce de Cochabamba a las plantaciones de coca del Chapare hay un destacamento policial donde los vehículos son meticulosamente revisados en busca de elementos para la fabricación de pasta de coca. Con el objeto de satisfacer mi curiosidad, un oficial de policía me condujo al pequeño galpón en el cual se hallaban apilados los artículos decomisados. Entre éstos había objetos muy comunes: papel higiénico, lámparas de kerosene, plásticos y baterías de automóvil. Todos esos artículos - señaló el policía - eran esenciales para la industria de la droga. El kerosene de las lámparas, por ejemplo, sirve como solvente para separar la cocaína de las hojas. El papel higiénico se utiliza para secar la pasta de cocaína.

Mi memoria quedó, de alguna manera, atrapada por ese galpón de la policía. Un sistema de control policial que requiere el secuestro de papel higiénico no sólo parece significar una intrusión en las necesidades básicas de los habitantes del Chapare, también resulta a primera vista destinado al fracaso desde un comienzo. Una fuerza policial ocupada en la incautación de elementos que en la vida de una comunidad sudamericana carente de agua corriente y electricidad, son tan básicos como los indicados, está también necesariamente involucrada en la persecución de la comunidad misma. Este artículo trata la forma como uno de los sectores sociales más pobres y sin recursos de la economía boliviana se encuentra atrapado en la declarada «guerra contra las drogas». Trata, concretamente, de los cultivadores y los pisadores de coca. Mi propósito es demostrar que, en Bolivia, la campaña antidrogas ha profundizado conflictos ya existentes entre ciertos sectores del Estado como lo son la policía y el ejército. En definitiva, son los pobladores de las zonas de cultivo de coca quienes soportan el mayor peso de esta fricción. Estos pobladores viven en lugares donde no existe la posibilidad de lograr ingresos mínimos en actividades alternativas al cultivo y el pisado de coca. En su alegado propósito de combatir la producción y tráfico de cocaína, las agencias de represión han orientado su campaña contra este sector, como el camino principal (y ciertamente más fácil) de lograr esos objetivos. Esto ha conducido a que estos grupos se vean forzados a soportar actos de pillaje, persecución y violencia. La DEA no solamente tolera esos hechos sino que se empeña en alentarlos como la forma más sencilla de obtener beneficios sectoriales y personales a través de resultados estadísticamente satisfactorios².

²En este sentido, v. el informe de la United States Unit for Anti-Narcotics Activities in the Andean Region. Thirtieth Report by the Committee on Government Operations, p. 31, 30/11/90. También Michael Levine: Deep Cover: The Inside Story of How the DEA Infighting Lost and Subterfuge Lost the U.S. Biggest Battle of the Drug War, Nueva York, Delacorte Press, 1990, p. 159.

Una guerra peculiar

En septiembre de 1990, mientras la ONU se encontraba empeñada en construir caminos en el Chapare, la DEA se embarcó en una campaña destinada a destruir caminos aparentemente utilizados como pistas de aterrizaje en la «zona roja» del Chapare. Una vez terminadas estas «operaciones», pude visitar algunos lugares en los cuales se habían realizado, conforme lo demostraba la existencia de cráteres producidos por los explosivos que la DEA arrojara desde el aire. Las explosiones habían dañado las rectas del camino que une las aldeas de Isinuta, San Gabriel y Eterazama. La zona de más tráfico de pasta de coca en el Chapare. Un oficial de los Leopardos o Umopar ³señaló con algo de resignación que la destrucción de los caminos no contribuía en nada al trabajo policial. Primero, porque al dañar las chozas de los residentes locales, los bombardeos aumentaban la tensión entre éstos y el Umopar. A pesar de que la Narcotics Assistance Unit (NAU) ⁴ había advertido a los pobladores sobre el área a bombardear, ello no afectaba el hecho de que las explosiones inevitablemente dañarían las precarias chozas que les sirven de vivienda.

Como consecuencia de las explosiones, los últimos días de septiembre unos 80 a 100 campesinos rodearon a un grupo del Umopar y la DEA provocando un tiroteo en las pedregosas márgenes del río Isiboro, cerca de la aldea de Isinuta. El incidente terminó con la aparición de un helicóptero que, en socorro de los policías, abrió fuego contra los pobladores dando muerte a cuatro. Después de alegar que habían sido atacados por traficantes modernamente equipados, los agentes de la DEA abandonaron la región en un viaje de descanso, con un agente herido en un hombro. Cuando visité el lugar tres días después del incidente puede observar en la orilla del río un chamuscado jeep del Umopar como testimonio del incidente.

Segundo, los bombardeos produjeron consecuencias extremadamente negativas sobre el futuro control policial de la zona. De acuerdo a un capitán del Umopar con quien conversé en el mismo lugar⁵, la destrucción de las rutas no obstaculizaría la actividad de los traficantes, que consiste principalmente en recoger pasta básica con sus aviones en las aldeas de San Gabriel e Isinuta. Todo lo requerido para continuar con la actividad habitual fue ofrecer algunos cientos de dólares a los pobladores quienes se ocuparon de limpiar el monte quemando árboles y paja para que las pequeñas y livianas avionetas reanudaran sus aterrizajes a los pocos días del

³Unidad policial adiestrada especialmente por agentes de EE.UU. para operar en zonas rurales en general y en selváticas en particular.

⁴La NAU (Narcotics Assistance Unit) se ocupa de coordinar las tareas de las diferentes agencias norteamericanas especializadas en la campaña antidrogas. Entre otras responsabilidades, la NAU administra los recursos de la DEA.

⁵Sarl Gabriel, Chapare, 2/10/90.

bombardeo. De regreso al cuartel del Umopar y la DEA en Chimore, pude leer la irónica inscripción de una placa colocada en un puente: «Construido gracias al esfuerzo del pueblo de los Estados Unidos: Cuerpo de Paz, 1968».

El episodio ilustra la manera como se conduce la «guerra contra las drogas» en Bolivia. No debe sorprender, por lo tanto, que cierta sensación de inevitable fracaso apabulle al personal de la embajada de EE.UU. en La Paz. La lógica de la «guerra contra las drogas» impide comprender a los funcionarios norteamericanos dedicados al tema que la campaña está fatalmente equivocada. Ellos piensan, en cambio, que la solución correcta consiste en destinar aún más recursos a la cruzada. El paso necesario para esta lógica consiste en involucrar al ejército boliviano. El esfuerzo norteamericano por involucrar a las fuerzas armadas ha ahondado el conflicto existente entre la policía y el ejército. Ha demostrado también que los políticos que apoyan esta campaña ignoran también la historia, la conformación social de Bolivia y las dificultades en democratizarse que enfrentan los países del Cono Sur. Más aún, las actividades represivas contra la coca y la cocaína en Bolivia producen un impacto directo sobre los habitantes del Chapare y resultan con frecuencia en la violación de derechos individuales básicos. En consecuencia, la militarización de la guerra contra las drogas tiene un efecto directo sobre los derechos humanos.

¿Quién quiere involucrar al ejército?

El entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas bolivianas, general Jorge Moreira-Rojas opinaba que la intervención de las fuerzas armadas debía ser contemplada sólo como un último recurso. El peligro de corrupción es demasiado grande como para no tomarlo en consideración⁶. De cualquier manera, el ejército está a disposición del poder político en lo que éste decida hacer respecto al tráfico de drogas y a los planes de desarrollo alternativo.

A pesar del esfuerzo represivo, nadie discute que tanto el cultivo de la coca como la producción de cocaína han registrado un incesante aumento. Algunos creen que, conforme a la retórica oficial norteamericana, el fracaso se debe a la falta de recursos suficientes. Para esta versión, involucrar al ejército es el paso más apropiado. En contraste con la actitud de EE.UU. en pro de esta solución, los países del Cono Sur la han rechazado en forma persistente. Sin embargo, en contra de la predicción de los políticos de su país, el entonces primer mandatario Jaime Paz-Zamora comprometió al ejército boliviano en la reunión de presidentes de Cartagena en 1990⁷.

⁶Entrevista del 16/1/90, La Paz.

⁷Reunión de George Bush con los presidentes Jaime Paz Zamora, Alan García y Virgilio Barco.

Una mirada al estado en que se encuentra Bolivia después de diez años de campaña demuestra que los críticos de esta política en Bolivia tenían razón por más motivos de los que ellos ofrecieron en esa oportunidad.

La resistencia latinoamericana a la militarización

En la reunión de los Ejércitos americanos llevada en noviembre de 1987 en Mar del Plata, Argentina, hubo coincidencia entre los diferentes representantes sobre la conveniencia de no involucrar a los ejércitos en la represión de la producción y tráfico de drogas. Durante el encuentro, los delegados bolivianos apoyaron esa posición, a pesar de la no comprobada afirmación respecto a la supuesta alianza entre traficantes e insurgentes⁸. Sólo los chilenos, representando a la dictadura de Augusto Pinochet, apoyaron la propuesta estadounidense de movilizar a los respectivos ejércitos en el control de drogas. En esa oportunidad se dieron varios motivos para mantener a las fuerzas armadas fuera de este conflicto. Por un lado, la corrupción que implica el contacto con drogas y traficantes tarde o temprano afectaría la disciplina militar. Por el otro, la versión norteamericana de la Seguridad Nacional había conducido previamente a los ejércitos latinoamericanos a embarcarse en «guerras sucias» contra la izquierda insurgente y la confusión de roles con los de la policía los había afectado seriamente. Las consabidas violaciones a los derechos fundamentales habían sido demasiado costosas como para embarcarse nuevamente en una confrontación con importantes sectores de la población y con el consiguiente aumento de la aversión popular que esta confrontación traería consigo.

La gran mayoría de los militares presentes en la reunión de Mar del Plata creía fervientemente en la «teoría de la escalera», de acuerdo a la cual cuando un mal cualquiera requiere de una campaña represiva, ésta debe ser llevada a cabo por el organismo estatal de la menor jerarquía posible⁹. Al considerarse a sí mismos el último y más alto recurso moral de sus países, los militares consideraron que no tenía sentido embarcar a su personal en una contienda que los cuerpos policiales deberían poder controlar. La mayoría de los oficiales militares de alto rango creía que la política más atractiva consistía en alejar discretamente a su personal de la mayoría de los conflictos que no estuvieran directamente vinculados en la insurgencia¹⁰.

⁸V. «Los ejércitos frente a la droga» (nota editorial sin firma) en Nueva Sociedad, Caracas, 7-8/89, p. 136. También Steven Wisotsky: *Beyond the War on Drugs*, Prometheus Books, Buffalo, New York, 1990, p. 162.

⁹He tenido acceso a esta versión gracias a Alberto Rodríguez Giavarini, Secretario de Defensa de la Argentina durante la administración de Alfonsín (Buenos Aires, 22-29/91 1989.)

¹⁰Donald Mabry: «The U.S. Military and the War on Drugs in Latin America» en *30 Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 1988, p. 53.

Cuando la delegación norteamericana insistió en la necesidad de involucrar a los ejércitos en la «guerra contra la droga», las democracias latinoamericanas, muchas de ellas incipientes y débiles, exigieron se considerara debidamente que la propiciada intervención bien podría significar el colapso institucional. El resultado de involucrar a las fuerzas armadas no podía ser sino lamentable. Si las fuerzas armadas fracasaban se haría evidente la fragilidad de los sistemas de defensa en su acción contra lo que sus mismos jefes consideraban una amenaza a la seguridad nacional¹¹. Eso expondría a sus respectivos países frente a sus enemigos potenciales. Ese argumento es sumamente familiar para las autoridades estadounidenses¹². Segundo, si, aunque improbable, las fuerzas armadas lograban el triunfo contra los traficantes, los generales podrían reclamar que sólo ellas, no los políticos, son capaces de defender a sus países. Este punto fue explícitamente articulado por la administración mexicana de Salinas de Gortari¹³. Las otras razones esgrimidas en contra de la intervención están vinculadas a la historia militar norteamericana: 1) la propensión manifiesta de ciertos oficiales de llevarse bien con los traficantes; 2) la vocación de gran parte del personal militar por violar los derechos humanos, especialmente de los campesinos; 3) el tradicional nacionalismo de muchos oficiales tornaría impracticable la cooperación con EE.UU. La guerra de Malvinas profundizó este nacionalismo exhibiendo lo poco confiable que es EE.UU. en relación con otras alianzas.

La resistencia boliviana a la militarización

Los comandantes de las fuerzas armadas bolivianas contaban con más razones que los demás. Algunas fotos circulan hoy en Bolivia exhibiendo a soldados pisando coca y a camiones militares transportando pasta básica durante la dictadura de García Meza¹⁴. El tráfico de cocaína en gran escala emergió en Bolivia no sólo como consecuencia de algunos audaces y oportunistas exponentes del sector privado, sino que también intervino el apoyo de la dictadura militar. El comienzo de la combinación de violencia gubernamental y la participación de políticos del más alto rango puede en realidad ser ubicado en el período de la dictadura de Banzer, entre 1971 y 1978. A pesar de los múltiples golpes militares que azotaron a Bolivia en este siglo, resulta claro que el tráfico de cocaína en Bolivia levantó vuelo durante este período. Como cabeza de uno de los principales partidos políticos, Banzer ha sido permanentemente acusado de haber obtenido su fortuna personal gracias a

¹¹Ibid.

¹²De acuerdo de la Posse Comitatus Act, de 1828, las fuerzas armadas de EE.UU. deben abstenerse de realizar tareas de prevención y persecución de delitos.

¹³Rohter: «Mexican Leader Vows Action Against Drugs» en New York Times, 12/12/88, col.1

¹⁴La «dictadura de la coca» como fue dado en llamar el régimen liderado por Luis García Meza, duró menos de un año a partir de 1980.

la participación en el negocio de cocaína. En realidad, el origen de esta actividad puede ser identificado como una consecuencia de la industria de algodón en Santa Cruz de la Sierra en los años 70. Los algodonereros sin experiencia obtuvieron créditos fáciles y se vieron compelidos a exportar rápidamente sus cosechas en un mercado internacional deprimido, a consecuencia de los reclamos de banqueros apresurados por conseguir la devolución de sus préstamos. Partes considerables de las cosechas quedaron sin vender cuando los productores intentaron retractar sus ventas¹⁵. La pérdida de mercados internacionales, sumada a una deficiente administración condujo a la industria del algodón a la bancarrota. Este fracaso alentó a los terratenientes de Santa Cruz a procurar una empresa más lucrativa. La elegida, el clorhidrato de cocaína, requirió el inmediato desarrollo y organización del cultivo de coca en Chapare. Los observadores de ese proceso afirman que no hay forma de explicar este proceso sin la contribución del general Banzer. El Banco de Crédito Agrícola de Santa Cruz, al cual Banzer estaba directamente vinculado, tuvo un rol protagónico en el financiamiento de la nueva industria. Banzer mismo se ocupó de desalojar a cientos de campesinos radicados en el Chapare durante su presidencia. Además Luis Valle, yerno de Banzer, fue expulsado del Canadá después de haber sido hallado en posesión de cantidades de cocaína, y el sobrino y el secretario privado del general fueron detenidos en Miami y Canadá respectivamente por delitos vinculados al tráfico de drogas¹⁶.

Tanto la crueldad de Banzer así como su conexión con el tráfico de cocaína palidecen en comparación con la dictadura de García Meza (1980-81) y su ministro de Interior, coronel Luis Arce Gómez¹⁷. El gobierno de García Meza utilizó las fuerzas armadas para asesinar a trabajadores disconformes, torturar a disidentes y secuestrar a opositores. García Meza debió su eficiencia a los asesores argentinos entrenados en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA¹⁸. Algunos vestigios de García Meza y sus secuaces perduran en Bolivia. Por ejemplo en 1989, mientras tres de sus oficiales se daban a la fuga, fue detenido en Cochabamba el general Arrazola, comandante militar de la región y ex-representante del propio García Meza frente a

¹⁵Los observadores de este proceso atribuyen la catástrofe de los algodonereros al intento de compensar los bajos precios internacionales mediante la venta de un algodón de fibra más corta que la ofrecida. Esto habría provocado un rechazo casi unánime de compradores europeos. Esta versión es la suministrada por Enrique Valverde, ex-jefe de la NAU en Cochabamba. En este mismo sentido v. Susan Eckstein: «Transformation of a Revolution from Below-Bolivia and International Capital» en 1983, *Society for Comparative Study of Society and History*, 1983, p. 105.

¹⁶James Dunkerley: *Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia 1952-1982*, 1984, cap. 6.

¹⁷Luis Arce Gómez fue extraditado a EE.UU. en 1989, procesado por traficar con cocaína a principios de los 80. En marzo de 1991 fue sentenciado a un máximo de 30 años de prisión; v. «30 Year Drug Sentence for Ex-Bolivian Aide» en *New York Times*, 23/3/91, p. 9.

¹⁸V. Iain Guest "Behind the Disappearances, University of Pennsylvania Press, 1990, cap.1.

los sindicatos de trabajadores¹⁹. Expertos en el tema adjudican el arresto a exigencias de la embajada de EE.UU.²⁰

El general Moreira Rojas, comandante general de las tres armas, fue conciente de la proclividad de las fuerzas armadas a su mando de cometer abusos aprendidos, entre otros, de militares argentinos. En este sentido, el general Moreira advirtió a su gobierno del peligro que significaba lanzar las tropas en pos de productores y traficantes. El ejército, afirmó sinceramente el general, quedaría expuesto a la tentación del dinero de los traficantes²¹. Ni la historia reciente de Bolivia ni las advertencias del general Moreira sirvieron para disuadir al gobierno de EE.UU. de su empeño militarista. A pesar de la información de la DEA de que Arrazola no estaba solo y los contactos entre el ejército y los traficantes de Santa Cruz eran susceptibles de ser fácilmente reestablecidos, la diplomacia norteamericana continuó su esfuerzo para involucrar a los militares²². En este sentido, el presidente Bush mantuvo la presión sobre los gobiernos de Perú y Bolivia.

En Bolivia, la promesa de Paz Zamora a Bush se enfrentó con una firme oposición por parte de amplios sectores políticos y, particularmente, de los representantes gremiales de los cultivadores de coca. Las ligas de campesinos exhibieron una decidida resistencia, y Evo Morales, representante de los cultivadores, prometió que sus seguidores defenderían los cultivos con sus vidas²³. El Senado boliviano adoptó una resolución formal desaprobando la intromisión del ejército en cuestiones de coca²⁴. De manera similar, los organismos no gubernamentales expresaron su apoyo a los cocaleros prometiendo poner en marcha toda clase de medidas de fuerza si el gobierno llevaba adelante su promesa²⁵. Estos sectores estaban de acuerdo en que la intervención militar traería consigo una escalada de violencia de la que ya eran víctimas los cocaleros. Con apoyo de la DEA, el Umopar había incurrido en suficientes abusos.

Un dilema político

La cuestión de involucrar al ejército colocó al gobierno boliviano en un dilema. Es obvio que a funcionarios y simpatizantes de la administración Paz Zamora les convenía sostener que el gobierno combatía exitosamente el tráfico de drogas. Tam-

¹⁹V. J. Dunkerley: op. cit., p. 296.

²⁰Entrevista de mayo de 1990 con un capitán del Umopar en Villa Tunari, Chapare.

²¹V. Última Hora, La Paz, 3/2/90.

²²V. The White House Report on the National Control Strategy, 1/1990.

²³V. Última Hora, La Paz, 16/1/90 y 14/4/90.

²⁴V. Última Hora, 16/1/90.

²⁵Presencia, La Paz, 8/4/90.

bién es obvio, sin embargo, sostener lo opuesto: convocando al ejército, el gobierno satisfaría las exigencias de EE.UU. y pondría también en evidencia la seriedad con que encaraba el problema de la cocaína. No obstante resultaba imposible llamar al ejército sin reconocer implícitamente que la campaña, tal y como había sido encarada hasta el momento, no estaba logrando el éxito que prestigiaría al gobierno. Lo que es claro es que acudir a la intervención militar era incompatible con la invocación de que Bolivia estaba ganando la «guerra».

Las grandes organizaciones permanecían intactas de acuerdo con las declaraciones de varios funcionarios del gobierno. Cada plantación de coca destruida era reemplazada por otras plantaciones en áreas menos accesibles. Más aún, de acuerdo a la versión de los expertos en el tema, el área sembrada estaba en franco aumento ²⁶. Los informes sobre la eliminación de la coca no revelaban el estado real de la situación de acuerdo con el consejero legal de la DEA. Los informes son, en ese sentido, engañosos: primero, porque había cierto grado de omisiones en los informes oficiales. Segundo, nuevas áreas sembradas reemplazaban con exceso las erradicadas. Más aún, en las nuevas áreas los programas de sustitución eran cada vez más difíciles. La ausencia de caminos en lugares apartados tornaban difícil, si no imposible, el transporte de bienes perecederos, como lo son los plátanos y los cítricos, a los mercados. En las regiones vecinas del Chapare e Isiboro Secure las áreas aptas para la plantación de coca superan los tres millones de hectáreas, lo que significa que existen más de treinta hectáreas disponibles por cada una que se erradique. Jorge Torrico, subsecretario sustituto de Defensa Social de la administración de Paz Zamora, manifestó abiertamente que el creciente volumen de tráfico de cocaína había sobrepasado las posibilidades de Umopar²⁷. Según esta versión, era obvio que este cuerpo era demasiado limitado para continuar siendo el principal protagonista en la «guerra». Esta agencia no había podido, hasta ese momento, atacar los niveles superiores de las organizaciones traficantes ²⁸. Para la mayoría de los observadores las deficiencias del Umopar radicaban, entre otras cosas, en la falta de equipo e información necesarios. La falta de equipamiento se debía fundamentalmente a la persistente oposición del ejército a armar mejor a la policía y más específicamente al Umopar ²⁹.

²⁶V. El jefe de la NAU hasta 1990 lo manifestó en repetidas ocasiones entre abril y mayo de ese año. También lo aseguraba Armando Aquino Huerta, abogado local y asesor legal de la DEA (entrevista en su estudio jurídico 24/5/90).

²⁷Entrevista con Jorge Torrico en La Paz, 28/5/90.

²⁸Entrevista en el Chapare con Gustavo, agente de la NAU, y con el capitán Ayala del Umopar en Chimore, Chapare, 29/5/90.

²⁹V. M. Benitez Larroca, « Umopar libra una batalla desigual contra el narcotráfico en Chapare» en Presencia, 18/3/90. Todos y cada uno de los agentes de policía con los que hablé del tema coincidieron con esta opinión.

Hay otras circunstancias que conducen a las deficiencias del Umopar. La oficina de la NAU en La Paz transformó el curso «Garra del Valor» destinado originariamente al entrenamiento de policías en un evento internacional. Con el propósito de involucrar a los cuerpos de policía de otros países, la embajada de EE.UU. en La Paz despachó invitaciones estadounidenses-bolivianas a Europa y al resto de Sudamérica. La finalidad consistía en ofrecer a extranjeros el curso de supervivencia y combate en la selva³⁰. Funcionarios norteamericanos y bolivianos supusieron que el programa de 55 días de entrenamiento en Chimore permitiría exhibir ante la comunidad internacional las virtudes de las enseñanzas de agentes norteamericanos³¹. Desafortunadamente, era claro que la apertura del curso a extranjeros tenía sus propios inconvenientes: reducía considerablemente el acceso al curso de agentes del Umopar al tiempo que derrochaba recursos en lugar de invertirlos en capacitar a policías locales. Más aún, la idea resultó ser una extravagancia inútil. Para la mayoría de los asistentes extranjeros el ambiente selvático era ajeno al medio en el cual cumplían con su misión en sus propios países. Los italianos y españoles directamente rechazaron la invitación. Los alemanes, ecuatorianos, argentinos y representantes de otras nacionalidades comenzaron el curso. Para ellos, sin embargo, la experiencia en la tupida selva boliviana fue sobre todo desorientadora. Tanto en Ecuador como en la Argentina, la interdicción por fabricación y tráfico de drogas es, más que nada, una actividad urbana. Para los europeos el escenario era novedoso y jamás supusieron que operarían en esa clase de terreno. Por estas razones no extrañó a nadie que la mayoría optara por no tomar el curso o abandonarlo a los pocos días de su iniciación³². En suma, parte de los recursos destinados a mejorar la efectividad policial en Bolivia, fueron dilapidados con el objeto de mejorar la imagen de los personajes de la NAU y la DEA.

Luego de la reunión de Cartagena de febrero de 1990, la embajada estadounidense en La Paz insistió en la necesidad de involucrar al ejército prometiendo que, en ese caso, contribuiría con 33 millones de dólares a su equipamiento. La presión norteamericana tuvo un fuerte impacto sobre los militares del país quienes automáticamente cambiaron de opinión sobre su posible rol en la «guerra». Abandonando la posición abstencionista exhibida en 1987 en Mar del Plata, aquellos oficiales participantes de las conversaciones con los diplomáticos estadounidenses llevaban con-

³⁰De acuerdo a Presencia (27/6/90), las invitaciones fueron cursadas por Brian Stickney, jefe de la NAU en Bolivia y Felipe Carbajal, comandante de la policía boliviana.

³¹Oficiales del Umopar jefes de la NAU en Cochabamba piensan que la idea de la ampliación del curso provino de la más alta jerarquía de la NAU en La Paz (ésta fue la opinión de cinco oficiales del Umopar que entrevisté entre el 27 y 29 de mayo de 1990, todos pidieron que sus nombres no fueran revelados).

³²Entrevista con el abogado Enrique Valverde, consejero de la NAU en Cochabamba, Villa Tunari, Chapare, 20/5/90.

sigo largas listas de los artículos bélicos que encontraban más atractivos. A pesar de que algunos bolivianos no ocultaron su sospecha de que sólo recibirían desechos de la guerra de Corea ³³, esto no desalentó a los militares negociadores. Un diplomático norteamericano en La Paz recordó su perplejidad cuando los oficiales expusieron su inventario. «Me sorprendió que no hubieran exigido submarinos y portaaviones» ³⁴.

No todos los oficiales bolivianos, sin embargo, coincidieron con la decisión de involucrar al ejército en las tareas de interdicción. El escepticismo de estos oficiales de alto rango radicaba en tres razones. Primero, en que intentos previos de coordinar la acción del ejército y la policía se habían visto enfrentados con dificultades insalvables³⁵. Segundo, el riesgo de corrupción es un tema a tomar siempre en cuenta. Tercero, el nacionalismo de los militares bolivianos puede dar por tierra con esfuerzos del gobierno de turno por mejorar las relaciones con los diplomáticos y los agentes antidrogas de EE.UU. cumpliendo su misión en Bolivia. Desde 1989 hasta fines de 1990, las «fuerzas especiales» (cuerpos de élite de las tres armas) estuvieron al mando de un respetado general llamado Lucio Añez ³⁶. En octubre de 1990, éste afirmó que, una vez involucradas en la «guerra contra las drogas», las «fuerzas especiales» no estarían más lejos de la corrupción que el mismo Umopar. El general agregó que lograr la armonía entre el ejército y la policía era poco menos que imposible. Más aún, había que ser realista: la posibilidad de que el ejército cooperara con la policía era prácticamente inexistente³⁷.

³³Entrevista con Hugo Cochamanides, Director Nacional de la Coca, La Paz, 24/5/90 y con el diputado nacional Ernesto Machicado, 25/5/90.

³⁴Entrevista en la sede de la embajada de EE.UU. (23/5/90) con un funcionario que pidió no ser identificado.

³⁵La operación «Blast Furnace», llevada a cabo en 1986 con la participación de 160 soldados norteamericanos fue un fracaso casi total. En su investigación, Louis Goodman y Johanna Mendelsohn citan declaraciones del coronel del ejército estadounidense Michael Abbott, en el sentido de que semejantes operaciones no deberían ser llevadas a cabo, primero por el enorme costo político que significaba ese tipo de empresa para el gobierno local. Segundo, porque los costos militares no eran en modo alguno compensados con el éxito de la operación («The Threat of New Missions: Latin American Militaries and the Drug War» en Louis W. Goodman (comp.) "The Military and Democracy: The Future of Civil-Military Relations in Latin America, 1990, p. 193). De acuerdo al funcionario de la NAU Enrique Valverde, un alto oficial del ejército de los EE.UU. le habría asegurado que se opondría a cualquier plan de repetir la experiencia porque ésta había demostrado la imposibilidad de lograr un mínimo necesario de cooperación y coordinación (entrevista en Villa Tunari, Chapare, 26/5/90).

³⁶La Policía Federal Argentina, según el jefe de la División de Drogas Peligrosas consideraba a Añez un hombre de comprobada decencia (entrevista con personal de esta División 11/7/90).

³⁷Entrevista con el general Lucio Añez, 31/5/90.

Había tres posibles alternativas al problema de la cooperación, y las tres resultaban igualmente inviables. La primera consistía en que el ejército y la policía actuaran independientemente. Esa solución no sólo tornaría ineficaces los esfuerzos de ambos sino que también derivaría en enfrentamientos cuando estuvieran operando sobre la misma pista. La segunda alternativa era que el comando conjunto estuviese en manos del ejército. El Umopar resistiría indefectiblemente esa modalidad. Dado que estos agentes contaban con varios años de experiencia, resultaría imposible lograr que aceptaran ponerse a disposición de militares. Estos últimos desconocían los secretos de la infiltración de organizaciones y del reclutamiento de soplones. Tercero, podía colocarse al Umopar a la cabeza de los esfuerzos conjuntos. Para las fuerzas armadas, sin embargo, esta alternativa resultaba insufrible. Tradicionalmente, los militares consideraban a la policía como parias cuya misión era subalterna a la defensa de la soberanía nacional. Este punto de vista fue claramente expresado por Marcelo Quiroga Obregón, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Quiroga rechazó la posibilidad de subordinar el ejército al Umopar porque el primero «nació antes que la República» (...) siendo su fundamental custodio que «no debe ser subordinado a ninguna institución que no sea la propia Constitución»³⁸. El desprecio de los militares hacia la policía tiene en Bolivia una larga historia. En 1952, cuando la revolución de Paz Estenssoro derribó a la junta militar presidida por el general Ballivia, este desprecio se transformó en odio. Los generales no han podido olvidar hasta el día de hoy que la policía no sólo apoyó el golpe sino que su personal se atrevió a clausurar la academia militar³⁹. El ejército contempló los hechos de 1952 como un abierto desafío al *esprit de corps* de sus cuadros. Esas heridas se reabrieron en 1990 ante la posibilidad de que los militares se unieran a las tareas del Umopar.

Nueva guerra: el Ejército contra la Policía

Cuando el comandante interino del Ejército, general Guido Sandoval, declaró orgullosamente que las fuerzas armadas estaban listas para «expandir» el frente contra el narcotráfico, se hizo evidente que se había originado la lucha por la hegemonía institucional. El jefe del Umopar, general Felipe Carbajal reaccionó abruptamente para poner al ejército en su lugar. Expresando el sentimiento común del Umopar, Carbajal declaró públicamente que el ejército debía subordinarse a la policía⁴⁰. El jefe del Umopar explicó que la experiencia y las técnicas adquiridas por las fuerzas a su mando en la lucha contra el tráfico de drogas exigían que el ejército

³⁸Última Hora, 4/4/90. (En su vehemente discurso Quiroga Obregón omitió incluir al Presidente).

³⁹V. Dunkerley: *Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia 1952-1982*, Verso, Londres, 1984.

⁴⁰Última Hora, 21/3/90.

se conformase con un rol secundario ⁴¹. Visiblemente, no existía la más mínima posibilidad de que ambas instituciones, satisficieran sus aspiraciones.

Con el propósito de comprometerlos en la campaña anti cocaína el presidente Paz Zamora ordenó la movilización de los regimientos de infantería Ustáriz y Barrientos a principios de abril de 1990. En el mes de mayo, poco antes de comenzar las maniobras del regimiento Barrientos, el jefe de la unidad, coronel Rodríguez, comunicó a la población de Cochabamba que sus primeros objetivos consistirían en desactivar al Umopar y la DEA. De acuerdo con el coronel, el Umopar merecía ser desmantelado debido a su doble contaminación: los traficantes habían comprado a un sector importante del personal. Más grave aún: toda la oficialidad había vendido su lealtad a los «yanquis de la DEA», una banda de entrometidos corruptos ⁴². Conforme a agentes de los servicios de inteligencia extranjeros en La Paz, las declaraciones del coronel no habían sido el producto de su excentricidad. Su concepción era compartida por muchos de sus camaradas de armas ⁴³.

Los hechos demostraron que la animosidad contra la DEA y el Umopar era seria. Al margen de una serie de incidentes menores entre el personal del Umopar con oficiales militares, éstos últimos demostraron también su escasa simpatía por la DEA. Oficiales del ejército acantonados sobre el único camino que conduce al Chapare desde Cochabamba, arrestaron a tres agentes de la DEA porque no llevaban credenciales en regla⁴⁴. La embajada de EE.UU. respondió al incidente con indignación porque los oficiales de las fuerzas armadas bolivianas sabían muy bien que los agentes norteamericanos gozaban de estatus diplomático.

De acuerdo al general Víctor Vargas, comandante de las fuerzas en el Chapare, el ingreso del regimiento Barrientos a la zona cocalera había logrado un «obstáculo psicológico» sobre los traficantes, a la vez que protegería a los campesinos de los abusos del Umopar ⁴⁵. Lo cierto es que la intervención del Barrientos significó un hito en la historia de las fricciones entre policía y ejército. Luego de repetidas provocaciones, el 7 de mayo un grupo de jóvenes oficiales militares atacó a cuatro agentes del Umopar cerca del lugar en el que el regimiento había sido acantonado en las inmediaciones de Villa Tunari. Tres agentes del Umopar consiguieron escapar de la cantina en la que tuvo lugar el enfrentamiento. Menos afortunado que sus camaradas, el cuarto hombre, de apellido Mariani o Mamani según la versión,

⁴¹Última Hora, 31/5/90.

⁴²Entrevista con Enrique Valverde, ex-jefe, y actual asesor de la NAU en Cochabamba, 26/5/90.

⁴³Informe del servicio argentino de inteligencia (SIDE) que solicitó no ser identificado, 21/5/90.

⁴⁴Entrevista con Enrique Valverde (26/5/90), y con el sargento del ejército Walter Montoya Villa Tunari, Chapare, 28/5/90.

⁴⁵Opinión, 15/4/90.

fue descubierto y atrapado, en la parte trasera del local. La descripción de la golpiza descrita por compañeros de la víctima demuestra algo más que una agresión circunstancial. El castigo a Mariani indica incompatibilidad institucional.

Los militares golpearon a Mariani no sólo en el lugar de encuentro sino que también lo condujeron a donde el regimiento estaba instalado para continuar castigándolo hasta poco menos que la muerte. El 11 de mayo, oficiales del regimiento convocaron al capitán Ayala del Umopar, para que acompañara a Mariani a su cuartel. Tal era el estado de Mariani, que Ayala exigió su descripción por escrito como condición para recogerlo ⁴⁶. Mariani fue inmediatamente transportado en helicóptero a Cochabamba donde estuvo en terapia intensiva por cinco días. A fines de mayo, 20 días después del incidente, estaba aún convaleciente.

A modo de excusa, los protagonistas de la golpiza explicaron al coronel del ejército a cargo de la investigación que Mariani había intentado fotografiarlos sin su consentimiento. Los testigos afirman, sin embargo, que la víctima no llevaba siquiera una cámara fotográfica. Lo que logró la investigación fue descubrir que existían más agravios todavía. Los agentes del Umopar convocados a testimoniar coinciden en que fueron tratados como si fueran los culpables⁴⁷. Dando por terminado el episodio, el comandante general del ejército declaró que el incidente no había alterado las «actividades normales de ambas fuerzas». Los jefes del Umopar no coincidieron con esta versión, como lo pone de manifiesto la respuesta del jefe del curso «Garras del Valor». El capitán Ayala manifestó abiertamente que el Umopar retribuiría todas y cada una de las futuras provocaciones⁴⁸. El capitán Ayala no era un vocero autorizado y el estilo que eligió distaba del que debía observarse en las relaciones entre las fuerzas a raíz del incidente; lo que quedó claro sin embargo es que, a raíz del incidente de Mariani, aumentó el conflicto entre las fuerzas. Esta fricción corporativa neutralizó obviamente los intentos de coordinar las acciones del ejército y el Umopar. Dos hechos ocurridos a mediados de mayo justificaron este pesimismo.

En mayo de 1990 el segundo jefe del destacamento más importante del Umopar en el Chapare era el mayor Ramiro Ortega. A través de un memorándum interno Ortega informó al general Lucio Añez, comandante de las Fuerzas Especiales, de un nuevo y sorprendente episodio. Fuerzas del Ejército habían abierto fuego contra un helicóptero del Umopar con el presunto propósito de desalentar a la tripulación a

⁴⁶Entrevista con el capitán Ayala, 29/5/90.

⁴⁷Versión de dos agentes del Umopar que solicitaron no ser identificados (Chimore, 29/5/90).

⁴⁸Idem.

volar sobre un campamento del ejército en el Chapare. Con el fin de evitar un enfrentamiento directo, el helicóptero se alejó rápidamente del lugar ⁴⁹.

La reacción inmediata de Añez fue notificar del incidente al comandante en jefe del Ejército, general Moreira, que optó por no darle trascendencia a la denuncia. Sorprendentemente, decidió actuar como si nada hubiese pasado, atribuyendo el informe a la «hipersensibilidad del Umopar»⁵⁰. Era difícil prever que esta actitud calmara los ánimos; en realidad sólo los intensificó. En círculos políticos la respuesta de Moreira fue considerada no sólo extemporánea sino también imprudente.

Por consiguiente, el hecho sangriento ocurrido en el poblado de Isinuta, en la región del Chapare, fue inmediatamente interpretado como una consecuencia de los ánimos caldeados. Una granada de mano lanzada contra un agente del Umopar sentado frente a un bar mató al destinatario. También dio muerte a cuatro civiles (uno de ellos era un niño de 4 años) e hirió a un número no menor de clientes ⁵¹. Unas pocas horas más tarde una turba enardecida sorprendió al presunto asesino abatido por la borrachera y le dio muerte prendiéndole fuego luego de rociarlo con combustible. Aunque el hecho fue horroroso, podría haber sido un crimen común, un acto aislado de locura. Sin embargo, los oficiales de policía a cargo de la investigación sospecharon que había sido pergeñado por personal del Ejército. El examen de algunos fragmentos de la granada indicaban que era una clase de explosivo al que sólo el Ejército tenía acceso. Los investigadores conjeturaron que el sangriento incidente estaba orientado a demostrar que la violencia en el Chapare había excedido al Umopar. Si las autoridades políticas llegaban a esta misma conclusión, la inclusión del ejército en la «guerra» sería irreversible.

Es posible que las sospechas de la policía fuesen aventuradas. Sin embargo, el caso de Mariani y la agresión contra el helicóptero sustentaban esta creencia. Para fines de mayo de 1990 recogí la opinión unánime entre los agentes del Umopar de que debían cuidarse del personal militar de los regimientos Barrientos y Ustáriz. En La Paz, algunos políticos culparon a la embajada de EE.UU. del conflicto generado por la intervención militar. El diputado Gregorio Lanza, por ejemplo, acusó a la embajada de generar deliberadamente el conflicto ⁵².

⁴⁹ Agencia de información ANF, La Paz, 17/5/90.

⁵⁰ Última Hora, 22/5/90.

⁵¹ Entrevista con el oficial de policía encargado de investigar el hecho (Villa Tunari, 29/5/90).

⁵² Gregorio Lanza: «Policía, fuerzas armadas y tráfico de drogas» en Presencia, 28/4/90.

Soportando el peso de la guerra

En Bolivia, la reputación del Umopar y de los agentes de la DEA son objeto de permanente discusión. Los habitantes de las regiones del Beni, el Chapare y de los Yungas consideran que, con apoyo directo de la DEA, el Umopar ha incurrido en abusos de todo tipo ⁵³. La versión de persecuciones injustificadas del Umopar bajo la supervisión de agentes de la DEA no proviene solamente del campesinado sino también de considerables sectores de la Iglesia Católica y miembros del Senado ⁵⁴. Con el apoyo de hacendados y comerciantes, la ciudadanía del Beni condenó formalmente al Umopar afirmando que los procedimientos de este cuerpo ponía en riesgo la seguridad de los habitantes de la región⁵⁵.

Las reacciones del gobierno sugieren que las denuncias eran fundadas. El subsecretario de Defensa Social, Gonzalo Torrico, reaccionó culpando a los traficantes por lo que consideró «imputaciones injuriosas contra las Fuerzas Especiales»⁵⁶. En contraste con la reacción de Torrico, el ministro del Interior Guillermo Capobianco admitió sin rodeos que el personal del Umopar en el Chapare debía ser «más respetuoso de los derechos civiles». Capobianco expresó también su preocupación por los abusos a mujeres y la amenaza de perjudicar el comercio en las regiones señaladas ⁵⁷. El ministro se refería, sin duda, a casos de violaciones, de pillaje y extorsión.

En octubre de 1990, el diputado boliviano Julio Mantilla Cuéllar declaró públicamente que en los Yungas el Umopar había extorsionado a los cultivadores de coca. Mantilla formalmente exigió que el ministro del Interior informara a la Cámara de Diputados sobre casos de violaciones de domicilio y tortura perpetrados por el Umopar. Además, el diputado sarcásticamente inquirió al ministro sobre la facultad del Umopar de cobrar impuestos⁵⁸. Como lo demuestra la historia de Bolivia de las últimas décadas, es dable prever que las constantes transgresiones contra las li-

⁵³ Los campesinos que entrevisté en cada uno de estos lugares coincidieron en este aspecto. Ver también William Walker III: *Drug Control in the Americas*, edición revisada, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1989, p. 200.

⁵⁴ El Senado boliviano investigó 32 casos de pillaje y «otros abusos» en el Beni. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han promovido múltiples investigaciones y lo cierto es que, en 1990, ninguna de las imputaciones había sido contestada por las cabezas del Umopar (Presencia, 13/12/90).

⁵⁵ Presencia, 13/12/89.

⁵⁶ Presencia, 17/3/90.

⁵⁷ V. Presencia, La Paz, 16/3/90. Observadores de los acontecimientos en el Chapare reconocen que el peso de la represión indiscriminada recae casi exclusivamente sobre los cocaleros y los sectores sin tierras (por ejemplo, Michael Painter: *Institutional Analysis of the Chapare Regional Development Project (CRDP)*, The Institute for Development Anthropology, Clark University, Worcester, Massachusetts & Institute for Development Anthropology, Binghamton, Nueva York, 1990, p. 42.

⁵⁸ Presencia, 1/10/90.

bertades públicas de los campesinos aumentarán considerablemente con la intervención militar. La «violencia innecesaria» a la que se refirió el presidente Paz Zamora como fundamento para mantener al Ejército fuera de la interdicción del tráfico de drogas ⁵⁹ implica claramente que la violencia, como también los «impuestos» recabados a los campesinos, marcharán por el Chapare junto con el ejército.

Algunas conclusiones

La cuestión de la intervención militar en la «guerra contra las drogas» en Bolivia plantea situaciones paradójales a la administración de turno. La inclusión del ejército contra el tráfico de cocaína satisface las aspiraciones de EE.UU. Esta medida, a su vez, sugiere que el gobierno ha decidido tomar el toro por las astas logrando que el declarado propósito de combatir el tráfico de cocaína vaya más allá de la retórica. Por otro lado, esta solución coloca al gobierno en el dilema de confesar que, implícitamente, las fuerzas especiales y el Umopar más especialmente, han fracasado en las misiones de interdicción. Si el gobierno porfía en sostener que su campaña es exitosa, no podrá justificar que la presencia del ejército sea necesaria. Invocar el éxito en la campaña contra las drogas resulta incompatible con la presencia militar en los cocaleros.

Los políticos a cargo de la policía han declarado orgullosamente que la intervención militar no es necesaria. Otros sectores gubernamentales han contradicho esta opinión. Pero las variadas posiciones sobre la intervención militar y el apoyo a la presión norteamericana tienen que ver poco y nada con el tráfico de drogas y mucho con políticas sectoriales. El aparente incremento del poder militar en el país ha causado revuelo sobre las agencias de control. Como nuevo agente en el terreno de las drogas, el Ejército ha entrado en colisión con la DEA y el Umopar; eventualmente también se enfrentará con la Armada y la Aviación. El conflicto entre militares y policías ha reemplazado a la cooperación transformándose en un tema delicado de por sí.

Tarde o temprano, la insistencia norteamericana en que el ejército intervenga colocará a los militares cada vez más cerca del poder que tuvieron García Meza y Banzer. Es de sospechar que, de esta manera, las políticas antidrogas debilitarán a las ya débiles instituciones democráticas. No es posible justificar la intervención militar pues no es dable adjudicar el fracaso de la «guerra» a la falta de recursos humanos y materiales. El fracaso se debe, más que nada, a la mal concebida política de declarar la «guerra». Los cocaleros bolivianos han sufrido y padecido la violencia

⁵⁹Última Hora, 8/5/90.

de las dictaduras militares de los 70 y los 80. Ahora son víctimas del Umopar. La decisión de suprimir esta violencia será más ineficaz con cada nueva agencia que el gobierno decida adjudicar a la interdicción. Esta cuestión es todavía más grave si una de esas agencias es el Ejército.

Referencias

*Zeballos, BOLIVIA PRESIDENT TO ASK BUSH FOR HELP IN DRUG FIGHT. - Reuters Library Report Reuters Wire Service. 1990; Los ejércitos frente a la droga.

*Anónimo, INFORME DE LA UNITED STATES UNIT FOR ANTI-NARCOTICS ACTIVITIES IN THE AND AN REGION. THIRTIETH REPORT BY THE COMMITTEE ON GOVERNMENT OPERATIONS. p31 - 1990; The U.S. Military and the War on Drugs in Latin America.

*Levine, Michael, DEEP COVER: THE INSIDE STORY OF HOW THE DEA INFGHTING LOST AND SUBTERFUGE LOST THE U.S. BIGGEST BATTLE OF THE DRUG WAR. p159 - Nueva York, EE.UU., Delacorte Press. 1990; Mexican Leader Vows Action Against Drugs.

*San, Gabriel, CHAPARE. - 1990; Transformation of a Revolution from Below-Bolivia and International Capital en 1983.

*Anónimo, NUEVA SOCIEDAD. p136 - Caracas, Venezuela. 1989; 30 Year Drug Sentence for Ex-Bolivian Aide.

*Wisotsky, Steven, BEYOND THE WAR ON DRUGS. p162 - New York, EE.UU., Prometheus Books. 1990;

*Mabry, Donald, 30 JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES AND WORDL AFFAIRS. p53 - 1988;

*Rohter, NEW YORK TIMES - PRENSA. 12/12. pC1 - 1988;

*Eckstein, Susan, SOCIETY FOR COMPARATIVE STUDY OF SOCIETY AND HISTORY. p105 - 1983;

*Dunkerley, James, REBELLION IN THE VEINS: POLITICAL STRUGGLE IN BOLIVIA 1952-1982. p296 - 1984;

*Guest, Iain, NEW YORK TIMES - PRENSA. 23/03. p9 - 1991; Goodman, Louis W. -- Umopar libra una batalla desigual contra el narcotráfico en Chapare.

*Anónimo, BEHIND THE DISAPPEARANCES. - EE.UU., University of Pennsylvania Press. 1990; The Threat of New Missions: Latin American Militaries and the Drug War.

*Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 03/02 - La Paz, Bolivia. 1990; Policía, fuerzas armadas y tráfico de drogas.

*Anónimo, THE WHITE HOUSE REPORT ON THE NATIONAL CONTROL STRATEGY. - 1990;

*Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 16/01 - La Paz, Bolivia. 1990;

*Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 14/04 - La Paz, Bolivia. 1990;

*Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 08/04 - La Paz, Bolivia. 1990;

- *Anónimo, ENTREVISTA CON JORGE TORRICO. 28/05 - La Paz, Bolivia. 1990;
- *Benitez-Larroca, M., ENTREVISTA EN EL CHAPARE CON GUSTAVO, AGENTE DE LA NAU, Y CON EL CAPITAN AYALA DEL UMOPAR EN CHIMORE. 29/05 - Chapare. 1990;
- *Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 18/03 - 1990;
- *Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 27/06 - La Paz, Bolivia. 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON EL ABOGADO ENRIQUE VALVERDE, CONSEJERO DE LA NAU EN COCHABAMBA. 20/05 - Villa Tunari, Chapare. 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON HUGO COCHAMANIDES, DIRECTOR NACIONAL DE LA COCA. 24/05 - La Paz, Bolivia. 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON EL DIPUTADO NACIONAL ERNESTO MACHICADO. 25/05 - 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA EN LA SEDE DE LA EMBAJADA DE EE.UU.. 23/05 - 1990;
- *Anónimo, THE MILITARY AND DEMOCRACY: THE FUTURE OF CIVIL-MILITARY RELATIONS IN LATIN AMERICA. p193 - 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA EN VILLA TUNARI. 26/05 - Chapare. 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA. 11/07 - 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON EL GENERAL LUCIO AÑEZ. 31/05 - 1990;
- *Dunkerley, ULTIMA HORA - PRENSA. 04/04 - 1990;
- *Anónimo, REBELLION IN THE VEINS: POLITICAL STRUGGLE IN BOLIVIA 1952-1982. - Londres, Inglaterra. 1984;
- *Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 21/03 - 1990;
- *Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 31/05 - 1990;
- *Anónimo, INFORME DEL SERVICIO ARGENTINO DE INTELIGENCIA (SIDE). - 1990;
- *Anónimo, OPINION - PRENSA. 15/04 - 1990;
- *Anónimo, ENTREVISTA CON EL CAPITAN AYALA. 29/05 - 1990;
- *Anónimo, VERSIONES DEL UMOPAR. 29/05 - Chimore. 1990;
- *Anónimo, AGENCIA DE INFORMACION ANF. - La Paz, Bolivia. 1990;
- *Anónimo, ULTIMA HORA - PRENSA. 22/05 - 1990;
- *Lanza, Gregorio, ENTREVISTA CON EL OFICIAL DE POLICIA ENCARGADO DE INVESTIGAR EL HECHO. 29/05 - 1990;
- *Walker III, William, PRESENCIA - PRENSA. 28/04 - 1990;

*Anónimo, DRUG CONTROL IN THE AMERICAS. p200 - Albuquerque, EE.UU., University of New Mexico Press. 1989;

*Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 13/12 - 1990;

*Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 17/03 - 1990;

*Painter, Michael, PRESENCIA - PRENSA. 16/03 - La Paz, Bolivia. 1990;

*Anónimo, INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CHAPARE REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (CRDP). p42 - Nueva York, EE.UU., The Institute for Development Anthropology, Clark University, Massachusetts & Institute for Development Anthropology. 1990;

*Anónimo, PRESENCIA - PRENSA. 01/10 - 1990;

ULTIMA HORA - PRENSA. 08/05 - 1990.